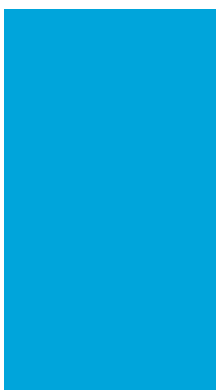


Center for Latin American Studies  
University of California, Berkeley



La evolución política de Chile  
(1988-2003)

Jorge Arrate

President of the Board of the University of Arts  
and Social Sciences in Santiago, Chile

September 2004  
Paper No. 10

W  
O  
R  
K  
I  
N  
G  
  
P  
A  
P  
E  
R  
S

The Center for Latin American Studies (CLAS) at the University of California, Berkeley publishes working papers and special conference papers relating to Latin America. This series represents the diverse and coordinated activities of faculty and affiliated scholars at CLAS. You may order papers from us by sending a check or money order for US \$5.00 made out to "UC Regents" along with the title and/or serial number to:

Working Papers Series  
Center for Latin American Studies  
University of California, Berkeley  
2334 Bowditch Street  
Berkeley, CA 94720

# La evolución política de Chile (1988-2003)

Jorge Arrate

President of the Board of the University of Arts  
and Social Sciences in Santiago, Chile

September 2004  
Paper No. 10



## INTRODUCCIÓN

Durante sus diecisiete años (1973–90) la dictadura de Pinochet utilizó la institución del plebiscito para lograr la legitimación a ciertas decisiones o, simplemente, para generar una imagen de apoyo ciudadano, es decir como instrumento propagandístico. Resulta paradójal que la Constitución que Pinochet hizo aprobar mediante plebiscito en 1980 sea mezquina en conceder espacio a la institución plebiscitaria, haciendo casi imposible recurrir a ella incluso en materias tan importantes como su propia reforma. Pinochet jamás recurrió a elecciones—ni siquiera fraudulentas—para designar autoridades municipales o parlamentarias. Sólo utilizó el plebiscito, pero bloqueó su utilización bajo los gobiernos democráticos.

El primer plebiscito organizado por Pinochet—denominado pudorosamente “consulta”—no sólo fue una farsa sino que incluso tuvo la apariencia de tal. Fue realizado sin las mínimas formalidades electorales y con fines meramente publicitarios con la absurda finalidad de dirimir entre Chile (representado por Pinochet) y la comunidad internacional (representada por Naciones Unidas) que condenaba la dictadura por sus violaciones masivas y brutales a los derechos humanos. Pinochet, como era obvio, resultó victorioso de manera abrumadora.

El segundo tuvo por objeto aprobar la Constitución que rige desde 1980 y que tenía dos características básicas: primero, consagraba una fuerte concentración de poder en el Presidente de la República. Segundo, contenía disposiciones transitorias que suspendían la aplicación de sus normas permanentes hasta que el país se hubiera “normalizado” en los términos concebidos por la dictadura. La primera extremaba la tradición presidencialista del sistema político chileno consagrada en las Constituciones de 1833 y de 1925; la segunda convertía a la Constitución en una virtualidad o en una promesa, en un conjunto de normas que tendrían aplicación en el largo plazo mientras en el país toda seguridad jurídica estaba amenazada por la potencial arbitrariedad de las decisiones del dictador y sus dirigentes más próximos. En ese plebiscito, realizado en la plenitud del poder dictatorial y sin registros electorales, hubo lugares del país donde apareció un número de votantes superior a la población, entre muchas notorias irregularidades.

De esta manera, Chile vivió la degradación de la institución plebiscitaria, convertida en instrumento de la propaganda oficial o en mecanismo para legitimar los designios políticos dictatoriales.

El tercer y cuarto plebiscito tuvieron características distintas y su realización y resultados marcaron fuertemente el porvenir democrático del país.

El tercero, efectuado en 1988, era parte de un cronograma institucional establecido en la Constitución “plebiscitada” en 1980 y tenía por objeto aprobar o reprobar el nombre del candidato a Presidente propuesto por la Junta Militar integrada por los Comandantes en Jefe de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El postulante fue, como era previsible, el propio Pinochet.

Al igual que los anteriores, el plebiscito de 1988 se realizó en una atmósfera marcada por el temor a una dictadura que había asesinado a miles de chilenos, desaparecido a otros miles y torturado, exiliado o exonerado de sus empleos a centenares de miles. No obstante, como resultado de la presión internacional, en parte por su pretensión de lograr la ansiada y esquiva legitimidad y además por los grados de desarrollo y de concordancia entre las organizaciones sociales y políticas contrarias a la dictadura, ésta debió respetar en el plebiscito de 1988 las formalidades de un proceso democrático. Para lograr este objetivo, la oposición se organizó en la Concertación de Partidos por el NO (el NO significaba la reprobación del candidato Pinochet) y logró, finalmente, que todos los sectores políticos, incluso aquellos que propiciaban la línea conocida como “rebelión popular” y formas violentas de lucha, se inscribieran mayoritariamente en los registros electorales para votar NO.

Dos líneas de acción fueron particularmente importantes en el triunfo opositor en el plebiscito de 1988. Una, el eficaz aprovechamiento de la llamada “franja televisiva”, establecida por la dictadura para que las dos opciones hicieran su propaganda audiovisual. Se trató de un momento único y por lo tanto de gran impacto: la “franja televisiva” permitió lo que había sido imposible durante quince años en que la oposición había sido acallada, la prensa censurada y la

opinión pública había recibido una información siempre unilateral. El acontecimiento mostró el fuerte impacto de los elementos audiovisuales en la política actual, en particular cuando previamente había imperado un largo silenciamiento.

Otra línea de acción fue el montaje, con importante apoyo internacional, de un aparato paralelo al del gobierno para el recuento de los votos, de alcance nacional y tecnológicamente potente. Mientras la campaña audiovisual de los partidarios del NO canalizó prudente e inteligentemente la convocatoria contra la dictadura y su pretensión de continuidad, el sistema de cómputo paralelo impidió que prosperaran las tentaciones de fraude que circularon en los altos niveles de gobierno aquella noche de octubre de 1988.

En estos hechos, reseñados sintéticamente, es posible identificar varios elementos cruciales para la caracterización posterior de la transición a la democracia:

- a) La opción de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales por una vía pacífica para desplazar la dictadura. Este hecho significó dejar de lado las convocatorias a la movilización social, de fuerte impacto en los años 1983 y 1984. Los esfuerzos se concentraron en los canales electorales que ofrecía la dictadura. Ésta, si bien parecía haber dejado atrás sus momentos más crueles, continuaba ejerciendo la represión y cometiendo crímenes, y resultaba impredecible en su comportamiento y en el cumplimiento de los compromisos enmarcados en su propia Constitución. De esta manera la Concertación recién constituida asumió serios riesgos políticos.
- b) La aceptación del cronograma propuesto por la dictadura: plebiscito y, si el resultado era NO, más de un año de permanencia del dictador en el ejercicio de la Presidencia, hasta la realización de elecciones presidenciales abiertas y la asunción, tres meses después, del nuevo gobierno. Si el dictador ganaba el plebiscito podría gobernar como Presidente de la República por un lapso de ocho años más.
- c) La apertura formal, como obvia consecuencia de los dos puntos anteriores, de espacios de diálogo y negociación con la dictadura y con sus apoyos políticos de derecha a fin de

viabilizar una transición pacífica.

Fue precisamente este último factor, la negociación gobierno-oposición, la que suscitó el cuarto plebiscito realizado por Pinochet. Efectivamente, la Concertación de Partidos por el NO, que pasó a denominarse Concertación de Partidos por la Democracia y que comprendía a todas las fuerzas anti-dictatoriales excepto el Partido Comunista, es decir los liberales democráticos, los demócratacristianos, los socialdemócratas, los ecologistas y los diversos agrupamientos socialistas, convino, no sin controversias internas, un conjunto de 54 reformas a la Constitución plebiscitada en 1980. Dichas reformas corrigieron numerosos aspectos objetables de la Constitución pero excluyeron otros de gran importancia que para la oposición significaban conformar un régimen que pudiera considerarse auténtica y plenamente democrático. En un plebiscito consensuado entre las dos partes del diálogo, en que el voto negativo fue reducidísimo, las 54 reformas fueron aprobadas.

En 1989 la Concertación, con el apoyo de los sectores de izquierda partidarios de la “rebelión popular”, triunfó en las urnas y eligió Presidente a Patricio Aylwin. Aquella presidencia duró, excepcionalmente, por disposición constitucional, cuatro años y fue seguida por el período de seis años encabezado por Eduardo Frei y luego, en el año 2000, por la presidencia de Ricardo Lagos.

¿Qué ha ocurrido en Chile en quince años de democracia? ¿Cuál pudiera ser el balance de este período y qué claves surgen de allí para el futuro?

## 1. CONDICIONANTES DE LA TRANSICIÓN CHILENA A LA DEMOCRACIA.

La historia está siempre presente en la vida de las sociedades humanas. Los hechos pretéritos significan opciones que en su momento se realizaron con preferencia de otras y que condicionan las que se abren a futuro.

En este sentido es indispensable subrayar algunos de los procesos históricos que significaron la constitución y evolución de Chile como Estado, condicionantes efectivos del acontecer social



y político.

Chile es aquella de las ex colonias españolas recién independizadas que primero alcanza la constitución de lo que se ha llamado por la historiografía nacional un “Estado en forma”. La estabilidad política de Chile, mucho mayor que la de las nacientes repúblicas vecinas y, en general, de las nuevas naciones latinoamericanas, se constituye tempranamente, en la década del treinta del siglo XIX y sobre bases institucionales y sociales marcadamente conservadoras. Aunque varias veces conmocionado, el siglo XIX chileno es un período en que la hegemonía constituida por una pequeña elite, que en la segunda mitad cristaliza un cuadro bipartidista y se separa formalmente entre conservadores y liberales, no es puesta en cuestión. El poder económico está concentrado en manos de los terratenientes propietarios de la tierra, los rentistas de la minería que, en el caso del salitre, es controlado por inversionistas ingleses, y los controladores de un comercio exterior basado en la venta de productos primarios. La sociedad chilena es profundamente clasista, con sesgos claros de discriminación étnica que apunta a la superioridad de lo europeo sobre lo mestizo y, ciertamente, lo indígena.

Un segundo elemento a tener en consideración como condicionante histórico es la idea de Chile como “territorio de guerra”, como ha señalado el historiador Mario Góngora, y, en consecuencia, la importancia del factor militar en la cultura chilena. Efectivamente, durante toda la colonia la Capitanía General de Chile está en permanente guerra con los habitantes originarios, particularmente el pueblo mapuche, sin lograr derrotarlo ni conquistar el territorio de la Araucanía. En el siglo XIX Chile se ve involucrado en siete guerras significativas. A partir de 1810 se desarrolla la guerra contra España conocida como “Guerra de la Independencia” que se extiende al norte hasta el Perú. Posteriormente, en la década de los sesenta, a propósito de un intento español por recolonizar América del Sur que se inicia con la ocupación de las islas Chinchas, Chile sostiene junto a Perú y Ecuador una segunda gravosa guerra contra España. En dos ocasiones en el siglo XIX llega a enfrentamientos bélicos con Perú y Bolivia, en las décadas del treinta y a fines de los setenta y comienzos de los ochenta. Tres guerras internas conmueven

al país: la guerra civil de 1851 expresión del enfrentamiento conservador-liberal, la llamada “pacificación de la Araucanía” que culmina en 1884 con la incorporación del territorio y pueblo mapuches al Estado chileno, y la cruenta guerra civil de 1891 que enfrenta el poder presidencial al del Congreso, con el involucramiento del capital inglés presente en las salitreras. Debe agregarse a lo anterior una situación de permanente conflicto limítrofe con Argentina que, si bien nunca se traduce en una guerra, condiciona severamente la política internacional, de defensa y de gasto público. De esta manera, la presencia militar, fuertemente acentuada con la creación de fuerzas armadas profesionales y, a comienzos del siglo XX, con la ley de conscripción militar obligatoria, va constituyendo un rasgo cultural que se traduce en un cierto sentido del orden, la disciplina y, muchas veces, una visión positiva sobre la autoridad fuerte.

En el siglo XX madura el proceso iniciado al promediar el XIX y emerge con fuerza la denominada “cuestión social”. Se trata del surgimiento de un proletariado minero e industrial que organiza las primeras instituciones solidarias, sindicales y políticas que aspiran a representar los intereses de las capas pobres y trabajadoras. En 1912 el obrero tipógrafo Luis Emilio Recabarren funda el Partido Obrero Socialista, matriz de los partidos de izquierda existentes hasta hoy, que nacerán en los años siguientes. En 1920 un líder liberal de ideas progresistas, Arturo Alessandri, es elegido presidente en la primera derrota política de la derecha chilena. En 1932 grupos socialistas se hacen del gobierno a través de un “golpe de palacio” y proclaman la primera República Socialista de América, de fugaz duración aunque simbólicamente trascendente. En 1938 Chile reproduce la experiencia de los “frentes populares” español y francés y elige presidente a un radical (social demócrata moderado), el abogado y maestro Pedro Aguirre Cerda. Ninguno de estos acontecimientos, sin embargo, logra poner en cuestión la hegemonía establecida largamente por la elite dominante que muestra una excepcional capacidad de, sobre la base de sus conveniencias, ajustarse a las circunstancias, dialogar y negociar y que, en definitiva, mantiene una posición de predominio.

En los años sesenta, sin embargo, nuevas fuerzas sociales y políticas conmueven el escenario nacional. La emergencia protagónica del pensamiento social cristiano, representado por el Partido Demócrata Cristiano, triunfante en 1964 en las elecciones presidenciales, fortalece las tendencias, estimuladas por el gobierno de Kennedy en Estados Unidos, a procurar en América Latina cambios estructurales. El gobierno democristiano de Eduardo Frei da inicio a reformas (en la agricultura, la minería del cobre, la política pública hacia las organizaciones sociales) que conmueven la sociedad y generan nuevos estados de conciencia colectiva sobre los problemas del país y sus vías de solución.

En 1970 el triunfo del candidato socialista Salvador Allende abre un período único: por primera vez en su historia Chile vive un intento a fondo por modificar el signo hegemónico. La experiencia allendista de la Unidad Popular, aparte de su significado como tentativa de relacionar indisolublemente democracia y socialismo, representa en la historia de Chile el momento de máxima amenaza para los intereses económicos e ideológicos establecidos. El impacto de los tres años de Allende es fortísimo y deja huellas que marcan el imaginario chileno, tanto el de los sectores dominantes como el de los grupos subordinados, el de los vencedores en el golpe militar de septiembre de 1973 como el de los vencidos.

La dictadura de Pinochet pone en práctica el despiadado reestablecimiento del orden amenazado. Sin embargo, el proceso dictatorial introduce cambios en la conducción económica mediante la adhesión al modelo denominado “neoliberal” y establece al mercado como institución rectora de la sociedad. El fenómeno alcanza, en el caso de Chile, un grado extremo. Autoritarismo político y mercantilismo económico son los dos rasgos del régimen de Pinochet que, en simétrica oposición al proyecto de Allende, establece el maridaje entre dictadura y capitalismo salvaje en sustitución al de democracia y socialismo.

Todos estos elementos, examinados en apretada síntesis, constituyen factores que condicionan la transición chilena a la democracia.

## 2. LA CONCERTACIÓN DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA.

La historia política de Chile muestra, en general, un cuadro relativamente ordenado de partidos políticos cuyos nombres tienden a corresponder con opciones ideológicas bastante claramente identificables. La estructura de partidos relativamente sólidos desde el punto de vista doctrinario y organizativo es una expresión de la configuración de la república como un estado plenamente constituido (“en forma”, según se señaló) y en funcionamiento mucho antes que en otros países latinoamericanos.

En el siglo XIX la confrontación es entre conservadores y liberales que, en el marco de una política elitista, representan sectores diversos de las clases altas orientados por intereses económicos concretos, convicciones religiosas e influencias de las grandes tendencias internacionales del pensamiento. La emergencia de los sectores medios a la vida política se traduce en el surgimiento de un partido que alcanzará vigoroso desarrollo en el siglo siguiente, el Partido Radical. Una izquierda naciente se cobija en el Partido Democrático, representativo de clases medias bajas, y en organizaciones pequeñas de signo solidario, anarquista o socialista en ese momento sin significado nacional. El siglo XIX es, pues, el siglo de la derecha, si bien sectores del liberalismo asumen importantes banderas progresistas y nacionalistas y, junto a los laicos radicales, contribuyen decisivamente a delimitar el fuerte rol de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado y la vida cotidiana de los ciudadanos.

Al comenzar el siglo XX adquiere presencia y vigor el proletariado organizado. De esta manera, la tendencia de la centuria, hasta el triunfo de Allende en 1970, es a la estructuración de un sistema político basado en tres tercios bien diferenciados: la derecha, el centro—con predominio radical, primero, demócratacristiano luego—y la izquierda, compuesta esta última básicamente por socialistas y comunistas.

El año 1938 constituye un hito importante en el proceso. Al calor de la nueva política de inspiración antifascista impulsada por la Internacional Comunista, que logra realizarse en Francia y España, Chile es el tercer país en que se constituye un “frente popular”. En las elecciones

presidenciales de 1938, enfrentadas dos fuerzas, la derecha y la alianza de centro-izquierda de ese nombre, Frente Popular, esta última se impone estrechamente y un radical accede a la presidencia de la república. Es la primera vez en que ocurren simultáneamente dos nuevos hechos políticos: uno, socialistas y comunistas deponen sus diferencias y se convierten en aliados, dos, el centro y la izquierda se unen para derrotar a la derecha.

De esta manera, el Frente Popular de 1938 debe ser considerado como el referente histórico del nuevo pacto entre centro e izquierda que se sella en el plebiscito de 1988: la Concertación de Partidos por el NO, luego Concertación de Partidos por la Democracia. En efecto, luego del triunfo del Frente Popular se suceden por catorce años gobiernos radicales sustentados sucesivamente en alianzas con sectores de izquierda o sectores de derecha. En 1958, veinte años después del Frente Popular, los “tres tercios” están constituídos: vence en las elecciones el candidato de derecha, Jorge Alessandri, con un tercio de los votos, lo sigue muy cerca Salvador Allende que capitaliza el tercio aproximado de izquierda, nuevamente unidos socialistas y comunistas, y Eduardo Frei, demócratacristiano, comparte con el candidato radical Luis Bossay algo más que el tercio de centro. Si bien en 1958 la izquierda ha reconstruido su unión, el centro y la izquierda no han podido llegar a acuerdo. El resultado es el triunfo de la derecha. Es digno de anotarse el hecho que por primera vez en las elecciones de 1958 el sistema electoral chileno puede considerarse como un sistema formalmente democrático. Reformas aprobadas en 1957, impulsadas por el centro y la izquierda, habían puesto fin a las posibilidades de cohecho y fraude que ejercía la derecha desde el siglo XIX.

En un país con votaciones por tendencia relativamente estables y rara vez alteradas por candidaturas extrañas al sistema formal de partidos es casi un axioma político que, hasta ahora, la única posibilidad de la derecha de triunfar en elecciones democráticas es la división entre el centro y la izquierda.

Si a ello se agrega que entre 1973 y 1988 la derecha se identificaba y ejercía el poder mediante una dictadura, es evidente que la gran operación política indispensable para desplazarla

era la constitución de una alianza amplia de centro-izquierda que aunara todas las voluntades que, juntas, fueran capaces de reestablecer la democracia.

Las dificultades, sin embargo, eran, a comienzos de los años ochenta, casi insuperables. Por una parte, si bien la Democracia Cristiana había asumido a través de su principal figura, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, una actitud contraria a la aprobación de la Constitución en 1980 y adoptaba crecientemente una actitud de oposición a la dictadura, sostenía distancias muy profundas con las fuerzas políticas que habían sustentado a Allende. Éstas, por su parte, vivían tres procesos paralelos que tendían transitoriamente a anular su capacidad de acción conjunta.

Primero, el Partido Socialista se había dividido en 1979 como resultado del proceso denominado “renovación socialista”. Este complejo fenómeno implicó para un sector de los socialistas retomar tradiciones teóricas más bien olvidadas y, en particular, la herencia teórica que vinculaba inseparablemente democracia y socialismo. No obstante, para la “renovación socialista”, el proyecto de la Unidad Popular había carecido de una acabada visión de construcción de hegemonía, en el sentido gramsciano. La “renovación socialista” visualizaba como indispensable para construir una amplia alianza contra la dictadura la definición de la democracia como espacio y límite de su acción política por parte de las fuerzas de izquierda. Por su parte, el otro sector socialista se había aproximado a las definiciones marxista-leninistas que sustentaba el Partido Comunista, estimaba plenamente vigente la alianza socialista-comunista y, si bien postulaba también un frente amplio contra la dictadura, no estaba dispuesto a concesiones teóricas e identificaba la carencia de una fuerte dirección única como la causa principal de la derrota de la Unidad Popular. En términos de relaciones internacionales, el primer sector tendió con el transcurso del tiempo a apoyarse principalmente en los partidos socialistas y socialdemócratas europeos y en sectores de aquella izquierda que disentía del punto de vista soviético. El segundo estableció fuertes relaciones con los partidos comunistas de Europa del Este y con sectores revolucionarios del Tercer Mundo, en particular de América Latina, aunque sin abandonar los lazos con segmentos importantes del socialismo europeo.

En segundo lugar, el Partido Comunista atravesaba su propia reconversión. Históricamente el Partido Comunista chileno, considerado como “ortodoxo” en función de su leal adhesión al movimiento comunista internacional, había desarrollado una importante fuerza de masas mediante una línea ininterrumpida de lucha democrática, particularmente vigorosa en el mundo social y en la vida cultural. Intentos ocurridos en los años cuarenta para conducir al partido hacia formas armadas de lucha, cuando los comunistas fueron víctimas de la Guerra Fría, perseguidos y declarados ilegales por diez años, habían sido severamente reprimidos por los mecanismos disciplinarios internos. Entre 1970 y 1973 el Partido Comunista había estado muy cerca de Allende en cuanto a la conducción más razonada y dialogante del gobierno de la Unidad Popular y lo había apoyado sin vacilaciones en sus intentos, nunca exitosos, de generar acuerdos con el Partido Demócrata Cristiano. Postulaba un “frente antifascista”—la categoría de los antiguos “frentes populares” inspirados en las tesis elaboradas a comienzos de los años treinta por el dirigente comunista búlgaro Jorge Dimitroff—para derrotar a la dictadura, pero su propuesta, acogida en general por los socialistas, tenía un eco muy débil en la Democracia Cristiana. Cuando el Partido Comunista realizó el viraje hacia una política de “rebelión popular” que conllevaría el surgimiento de un destacamento armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la Democracia Cristiana se distanció aún más. Al promediar la década la nueva política comunista enfrentaría dos graves tropiezos: la pérdida de un importante arsenal de armamento descubierto por la dictadura y el fracaso del atentado contra Pinochet realizado por un comando armado, ambos ocurridos en una misma semana en 1986. Fue el comienzo del aislamiento y crisis interna que remecería al Partido Comunista en los años siguientes disminuyendo considerablemente su peso político y social.

El tercer fenómeno es un resultado de los procesos anteriores: la alianza entre socialistas y comunistas, sostenida desde 1957, fue declarada inválida como estrategia política por la “renovación socialista” y, progresivamente, se fue trizando entre el segmento socialista que aún la postulaba, que comenzó a percibir la nueva política del PC como un factor que en los hechos

hacía imposible cualquier alianza con el centro político.

En la primera mitad de los ochenta el país padeció una gravísima crisis económica que golpeó con singular fuerza a los sectores trabajadores. Se generó una coyuntura en que la fuerza acumulada por los opositores a la dictadura pudo ser puesta en juego a través de masivas movilizaciones populares, las “protestas”, que por primera vez amenazaron la continuidad del régimen. El resultado de las “protestas” fue, en cierto sentido paradójico. Por una parte la población percibió que la fuerza antidictatorial era respetable y con capacidad de afectar severamente la estabilidad del sistema imperante y el funcionamiento de la economía. El jaque al dictador fue evidente. Pero, al mismo tiempo, y en la medida en que parte significativa de esa fuerza estaba orientada por una estrategia de “rebelión” sin excluir las formas de lucha violentas, las “protestas” generaron el temor en sectores de centro y otros grupos partidarios de la democratización a un crecimiento de la fuerza del Partido Comunista y del Frente Patriótico. Esta percepción afectó también a sectores de la propia dictadura. De esta manera, mientras las “protestas” constituyeron un momento alto de la lucha por la democracia, impulsaron, sin que esa fuera la intención de sus principales promotores, un fortalecimiento de la convicción, compartida por gran parte de la oposición a Pinochet y sectores de la derecha que gobernaba junto a Pinochet, sobre la necesidad de construir una opción no violenta para reconstruir formas democráticas de convivencia.

La constitución de la Alianza Democrática, que marcó el momento en que demócratacristianos y socialistas de la “renovación” acordaron coaligarse a pesar de sus profundas diferencias durante el gobierno de Allende, fue el antecedente inmediato de la Concertación. Los demócratacristianos abrieron, con la abstención de los socialistas del sector “renovado”, un espacio de diálogo con la dictadura. De esta manera, al impulso de la movilización de masas, se constituyeron los dos caminos, discrepantes, para derrotar a Pinochet: el de la Alianza, y luego la Concertación, que apostaría al plebiscito de 1988 y a una “transición pacífica” a la democracia, y el del Partido Comunista que apuntaba a generar por medios tanto



pacíficos como violentos, es decir mediante “todas las formas de lucha”, las condiciones de inestabilidad que pusieran término al régimen dictatorial.

La Concertación acogió a todos los sectores socialistas y a un pequeño segmento de liberales democráticos, junto a demócratacristianos, radicales y ecologistas. El Partido Comunista fue excluido sobre la base de la incompatibilidad de su política con la línea acordada por la Concertación. En 1989 los socialistas se reunificarían, luego de diez años de división, y pasarían a constituir junto a la DC, los dos partidos ejes de la coalición, posición que conservan hasta hoy. Una nueva formación, el Partido por la Democracia (PPD), creada por los socialistas durante su ilegalidad con el fin de ejercer derechos de control durante el plebiscito de 1988, adquirió vida permanente como partido no ideológico y agrupó a sectores democráticos que abarcaban un amplio abanico, desde ex comunistas hasta disidentes de la derecha, en torno a un núcleo de socialistas que no se reincorporaron a su partido cuando éste se reunificó y pudo legalizarse.

A diferencia del Frente Popular de 1938, la alianza no incluía al total de la izquierda. A veces, en la comparación internacional, la Concertación ha sido considerada como un equivalente de la estrategia eurocomunista formulada en 1973 por Enrico Berlinguer y denominada “compromiso histórico”. Sin embargo, la ausencia del componente cultural y político comunista invalida esa comparación. La Concertación se asemeja más al “centro-izquierda” italiano que vinculó a democristianos y socialistas en gobiernos cuyo liderazgo operó con alternancia, a partir de los años setenta. No obstante, la alianza chilena se funda en organizaciones políticas diferentes de su símil italiano. Si bien la Democracia Cristiana chilena tiene sectores en su interior, es claramente un partido de centro con un componente de centro-izquierda y carece de un ala conservadora tan fuerte como en el caso de la vieja DC italiana. Por su parte el socialismo chileno, aunque hoy día de inspiración netamente reformista, posee una tradición marxista, revolucionaria y latinoamericanista que no deja de resonar en sus acuerdos y decisiones políticas. La Concertación es, en consecuencia, una coalición singular.

Uno de los aspectos de mayor interés en la Concertación es su larga vigencia. Ninguna coalición política, si se exceptúa la prolongada alianza entre socialistas y comunistas que duró treinta y tres años (1957–80), ha tenido en Chile la duración que la Concertación. En particular, es preciso señalar que en sus quince años de vigencia ha estado catorce en el gobierno y nunca ha perdido una elección presidencial, parlamentaria o municipal.

Por otra parte, la Concertación ha sorteado con éxito un obstáculo muy serio para cualquier coalición política, cual es el cambio de liderazgo. Para los demócratacristianos que fundaron la Concertación es posible que una de las bases implícitas del pacto, imposible de explicitar, fuera el liderazgo del Partido Demócrata Cristiano. Principal partido político chileno desde 1964 hasta 2001, la Democracia Cristiana fue decisiva en la oposición a la Unidad Popular y el derrocamiento de Allende. Al momento del plebiscito había pocas dudas que el candidato presidencial de la Concertación, si el NO triunfaba y Pinochet reconocía el resultado, debía ser un democristiano. Efectivamente, en 1989 y luego en 1993 el candidato presidencial fue un DC. De este modo las bases de la coalición podrían haberse definido en aquellos años como un candidato presidencial del partido mayoritario, un gabinete ministerial compartido y un pacto parlamentario que reconociera sus respectivas fuerzas a todos los componentes de la alianza. En 1999, luego de primarias abiertas, se alteró la primera condición y la Concertación soportó bien el cambio de liderazgo de un democristiano a uno de sus miembros identificado con el PPD y el Partido Socialista.

En el curso de su existencia la Concertación generó fenómenos de transversalismo entre sus partidos. De esta manera las sensibilidades políticas a veces se han manifestado en agrupamientos ocasionales entre sectores de distintos partidos, pero con una sensibilidad más de izquierda, y sectores más moderados de los diversos partidos, dejando de lado las militancias individuales. Así ocurrió, por ejemplo, en el debate autocrítico de fines de los años noventa, que enfrentó a dos grupos representativos de una postura más conformista y una más crítica. Estos grupos atravesaban todo el espectro partidario de la Concertación. El hecho ha fortalecido a la

coalición, sumado a otro potente factor: el de ser una suerte de federación electoral en el marco de un sistema que premia a las grandes agrupaciones y castiga, incluso con la marginación, a las pequeñas. Ambos elementos son factores explicativos del éxito político de la Concertación.

La Concertación ha estado cruzada a través de su existencia por visiones diversas respecto a materias importantes. Entre ellas la vinculación con el Partido Comunista y los grupos de izquierda extraparlamentaria, cuya votación llegó a ser decisiva en la elección presidencial de 1999–2000, y que el Partido Socialista quisiera de algún modo formalizar mientras la idea es vetada por la Democracia Cristiana. En materia económica ha habido en la Concertación visiones moderadas, que han tendido a primar, y, por otra parte, perspectivas más críticas de los contenidos de la política económica fundados en la lógica del mercado. En materia valórica temas como las campañas contra el SIDA, la educación sexual, el divorcio vincular, el aborto terapéutico, entre otras, suscitan puntos de vista muchas veces contrapuestos. En cuanto a los derechos humanos, tema altamente polémico durante la transición chilena, los socialistas han mantenido, en general, una postura más próxima a la línea levantada por las organizaciones de derechos humanos, aunque parte de los democristianos la ha compartido. En cambio, los socialistas han objetado abiertamente los contenidos que se atribuyen a la llamada “reconciliación” sospechosos que dicho proceso persigue legitimar formas de impunidad para los violadores. En cuanto a las desigualdades sociales y económicas que afectan al país, todos los componentes de la Concertación han expresado disconformidad, si bien los grados de la crítica y de la revisión que se propone a las propias políticas varía tanto entre directivas partidarias como entre miembros del gobierno, parlamentarios y dirigentes.

Éstos y otros temas configuran los desafíos de la Concertación para el tiempo que viene. Hasta ahora, sin embargo, la coalición ha sorteado sus diferencias privilegiando sus puntos de acuerdo, sus conveniencias electorales y su permanencia en el gobierno.

### 3. EL PINOCHETISMO, LOS PODERES FÁCTICOS, LA DERECHA.

El 11 de septiembre de 1973 Chile se alejó por largo tiempo de las ideas y prácticas

democráticas. La izquierda fue privada del espacio público que había sido escenario de su desarrollo y muchos de sus cuadros fueron diezmados, hechos prisioneros o debieron exiliarse. Los partidos políticos, entre ellos los de centro, opositores al gobierno de Allende, como la Democracia Cristiana y algunos sectores radicales, fueron declarados en receso y debieron suspender toda actividad abierta. Las organizaciones de derecha acataron sin objeción la decisión de la Junta Militar de prohibir la política. El régimen despejó la calle y ocupó militarmente el territorio que las multitudes habían poblado con fervor. Chile había vivido algunos años de dictadura, pero nunca una etapa de terrorismo de estado, violencia y crueldad como la que se iniciaba entonces.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros (policía militarizada) participaron institucionalmente en el golpe luego de remover los obstáculos internos representados por militares democráticos y establecer la base de complicidad indispensable para el éxito de la conspiración. El apoyo externo brindado por el gobierno estadounidense de Nixon y Kissinger fue factor importante en la eclosión final de la conjura.

Pareciera ser, según los antecedentes recogidos, que Pinochet no fue el más decidido líder del golpismo. Un oficial mediocre del Ejército, Pinochet hizo carrera valorando su propia opacidad y su sentido corporativo de la disciplina. Pero si bien no fue un adalid de la conspiración, asumió sin problemas un liderazgo de algo que ya estaba en marcha, simplemente porque su arma, el Ejército, tiene la prelación entre las Fuerzas Armadas chilenas. Estas gobernaron primero a través de una Junta Militar en la que Pinochet, en representación del Ejército, era *primus inter pares*. A poco andar asumió como Presidente de la República y la Junta pasó a actuar como órgano legislativo. El poder ejecutivo, sin embargo, fue repartido por sectores del gobierno entre las cuatro ramas militares.

El pensamiento político de Pinochet era particularmente primitivo, sin sutilezas. Por eso no resulta sorprendente que el ejercicio del poder político se haya establecido sobre las bases del verticalismo y la disciplina propios de las instituciones militares, las únicas experiencias

colectivas que Pinochet efectivamente conocía. El principio del mando vertical orientó todo el gobierno y, superpuesto al compromiso institucional y a la distribución de responsabilidades por arma, constituyó la clave de la larga permanencia de Pinochet en el poder. En algún momento la derecha política, que apoyó la dictadura en su gestación y desde sus inicios, escaló posiciones al interior del gobierno como para adquirir un enorme grado de influencia en la construcción de nuevas instituciones. Se destacaría, entre otros, el principal autor de la Constitución de 1980, el jurista, fundador e ideólogo máximo de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el católico integrista Jaime Guzmán Errázuriz. La derecha económica, por su parte, logró revertir casi todas las estatizaciones realizadas por Allende (se exceptúa el cobre) y recuperar sus propiedades o ser compensada y, en el plano gubernativo, asumió desde el primer momento un rol principal.

La dictadura de Pinochet se consolidó mediante la combinación del autoritarismo de corte militar que aquel representaba bien y el extremo liberalismo económico encarnado en sus asesores y ministros formados en las teorías del Profesor de la Universidad de Chicago Milton Friedman. La dictadura fue el reinado de los llamados “poderes fácticos”, o sea de aquellos grupos o instituciones que sin representatividad democrática y desde fuera del aparato del Estado y, en este caso en un marco dictatorial, bregaban por sus intereses y los imponían: los militares, los grandes empresarios, las altas finanzas, la Iglesia Católica. La desaparición de la derecha política era una farsa: en el hecho lo que operaba era su primera naturaleza, la de derecha económica y, en todos los niveles del gobierno militar.

Sin embargo, la Iglesia, que había intentado evitar el golpe y suscitar un acuerdo entre Allende y sus opositores, pero que le dio sustento los primeros días, asumió progresivamente un rol antidictatorial. A las pocas semanas del derrocamiento las autoridades eclesíásticas comprobaron el grado y masividad de las violaciones a los derechos humanos que cometía el nuevo régimen y dieron los pasos necesarios para, durante toda la dictadura, brindar protección a los perseguidos y aminorar los efectos de la acción criminal del gobierno.

Pinochet se apoyó, para construir su poder personal, primero en la primacía del Ejército

sobre las restantes Fuerzas Armadas, luego en su propio dominio incontrarrestable dentro del Ejército en el que, gradualmente, fueron dejando sus funciones por muerte o retiro los generales de su grupo generacional, hasta constituir una apreciable brecha etaria con su segunda línea de mando. En todo momento ofreció plenas garantías a la derecha económica que, a cambio de la protección de sus intereses y el impulso a políticas privatizadoras y favorables al gran capital, se comprometió con Pinochet sin fisuras, sin vacilaciones. El catolicismo ultra conservador halló en el espacio pinochetista el territorio ideal para promover sus visiones integristas, corporativas y paternalistas. Se incorporó vigorosamente al medio universitario, antes de signo progresista, y pasó a controlar las Universidades públicas y, en la segunda mitad del período dictatorial, a fundar nuevos centros de estudio privados. Los medios de comunicación fueron totalmente controlados y los grandes propietarios de los principales medios escritos, también representantes de sectores económicos poderosos, pusieron sus periódicos al servicio de la dictadura hasta su término.

Las Fuerzas Armadas, el gran poder económico, los poderes fácticos creadores y difusores de ideología constituyeron así una alianza que existía desde los inicios de la República, pero que alcanzaba ahora una contundencia desconocida. Aunque los sectores más ilustrados de este conglomerado no sentían precisamente orgullo, Pinochet era el caudillo.

#### 4. LAS COMPLEJIDADES DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA.

Todo proceso de sustitución del signo dominante del poder estatal implica grados de violencia y elementos de convicción. Sin embargo, en un cierto punto las fuerzas políticas deben efectuar una opción entre impulsar la insurgencia y eventualmente una revolución, en que priman las acciones desestabilizadoras y violentas, o llevar a cabo una transición, en que el factor decisivo son las negociaciones y pactos, implícitos y explícitos.

El proyecto de Allende había sido un intento excepcional: pacífico en sus medios era revolucionario en sus fines, pues impulsaba profundos cambios sociales. La oposición había intentado formas de desplazar su gobierno utilizando, tal como Allende había hecho para acceder

al poder, medios constitucionales. No obstante, el apoyo popular que tenía Allende, la fortaleza de sus partidos y los resultados electorales hicieron imposible esta tentativa de la derecha. La confrontación social, sin embargo, había alcanzado momentos agudos. La oposición de derecha se fue haciendo crecientemente violenta y arrastró a la Democracia Cristiana hasta culminar en el sangriento golpe militar que llevó a Pinochet al poder. La revolución pacífica y democrática había fracasado. También los intentos de llevar a cabo un diálogo que permitiera una solución no violenta. Los años siguientes serían el tiempo de la dictadura.

Intentar el desplazamiento de una como la chilena requirió en un momento de una opción entre la perspectiva insurreccional y la negociación política. Tanto la insurrección antidictatorial como la idea de una transición fueron parte del imaginario de las fuerzas políticas.

La revolución antidictatorial implicaba un proceso necesariamente violento en que la fuerza militar sería puesta en juego. El Partido Comunista diseñó una estrategia de este tipo en que la insatisfacción y rebeldía de los sectores populares sería encauzada en una dirección insurreccional, de modo de generar una rebelión popular con resultados revolucionarios. En los años 1983 y 1984, como ya se dijo, la movilización social por la democracia se convirtió en “protesta”, con componentes no violentos y también violentos, particularmente en los sectores urbanos marginales. La organización impulsada por el Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ejecutaba ya acciones—secuestros, cortes de energía eléctrica y otros—típicas de los inicios de procesos de lucha militar.

Al producirse las protestas y una creciente y vigorosa movilización social, las fuerzas políticas enfrentaron la opción entre impulsar una insurrección revolucionaria o una transición, proceso pacífico de negociación para la transferencia del poder. La fuerza de la protesta social y política y de la condena internacional, colocaban a la dictadura y a sus partidarios—los grupos de poder económico, particularmente—en una posición de no poder seguir gobernando sin enfrentar un conflicto que derivaría muy probablemente hacia el terreno militar. Por su parte, la mayoría de la oposición estimaba inviable una victoria en este ámbito. De esta manera la Democracia

Cristiana y el Partido Radical, primero, observaron que la fuerza que iba adquiriendo la opción insurreccional podría desplegarse en el futuro con una potencia que no deseaban y los socialistas, luego, estimaron que era poco realista pensar que un movimiento insurreccional armado pudiera derrotar a las fuerzas armadas más profesionales y mejor dotadas de América Latina.

Los opositores a la dictadura, entonces, alcanzaron un punto de bifurcación. Si bien en los primeros diez años de la dictadura no habían logrado un acuerdo político, fundamentalmente por la renuencia de los democristianos a aliarse con los comunistas o con los que habían sido partidarios de Allende, nunca las estrategias se habían separado tan tajantemente. El hecho es que, por una parte, las movilizaciones sociales adquirirían un carácter crecientemente violento a los ojos de los sectores de centro opositores a Pinochet y, por otra parte, se aproximaba una fecha clave en el cronograma establecido por la propia dictadura: el plebiscito de 1988. En efecto, la Constitución de 1980 había establecido que ocho años después de su dictación se plebiscitaría una propuesta presidencial, previo establecimiento de los mecanismos propios de una democracia electoral. Para ello debían abrirse registros electorales y reconstituirse partidos políticos (aunque algunos, como comunistas y socialistas eran inconstitucionales), todo ello en los plazos señalados por la Constitución y sus leyes complementarias, dictadas también por Pinochet.

Democristianos, radicales y socialistas concluyeron que el camino posible y con menor costo en vidas para desplazar la dictadura era acogerse a esas disposiciones legales y participar en el plebiscito de 1988. Los comunistas rechazaron tajantemente esta opción, incrédulos sobre su viabilidad y desconfiados sobre su resultado, y persistieron en desarrollar su perspectiva insurreccional, si bien en la etapa final se plegaron mayoritariamente al voto NO.

La transición chilena a la democracia debe ser considerada como una de las más complejas de todas las transiciones habidas en Europa del Sur en los años setenta y en América Latina en los años 80. Una comparación de algunas circunstancias principales así lo confirma.

Tanto en Portugal, en Grecia y en Argentina, las fuerzas armadas fueron, antes del



inicio de la transición, objeto de derrotas militares. En Portugal la guerra colonial en Angola, Mozambique y Cabo Verde no tenía destino, significaba un desangramiento para el país y un motivo de descomposición de la disciplina de las instituciones militares. En Grecia el “gobierno de los coroneles” había sido derrotado militarmente por los turcos en Chipre. En Argentina la aventura de las islas Malvinas, concebida por los cabecillas de la dictadura para consolidar su poder, terminó en una derrota militar ante las fuerzas inglesas y condujo al desprestigio y desmoralización de las Fuerzas Armadas y, una vez establecido un gobierno democrático, al juzgamiento y condena de las principales figuras del llamado “proceso de reorganización nacional” encabezado por el General Videla.

En Brasil, el régimen militar iniciado en 1964 generó sus propios mecanismos de renovación. De esta manera, los generales—un reducido cuerpo electoral, ciertamente—procedían en períodos preestablecidos a designar un nuevo Presidente de la República, evitando al menos una personalización excesiva del gobierno.

En el caso de España, la transición considerada paradigmática por la estabilidad del proceso y la fortaleza de su consolidación, el antecedente de la dictadura había sido una sangrienta Guerra Civil con cerca de un millón de muertos. Pero en 1975 habían transcurrido casi cuarenta años desde entonces y los liderazgos políticos se habían renovado casi por completo. El rey que encarnaba la monarquía que había sido elemento central en la Guerra Civil era de la joven generación y de mentalidad moderna y aperturista. El líder civil que encabezó los inicios de la transición, Adolfo Suárez, había sido alto dirigente del movimiento franquista, era un hombre que representaba un cambio y al mismo tiempo una continuidad con el régimen de Franco. Los empresarios españoles ansiaban la plena integración con la vecina Europa, que no era posible sin la previa democratización de España. El contacto de España con el exterior había sido un flujo permanente e importante, desde que el país se había convertido en uno de los grandes centros turísticos de Europa. Los comunistas españoles habían atravesado una renovación ideológica al adherirse al pensamiento “eurocomunista” y abandonar su histórica adhesión a la

conducción soviética del movimiento comunista. Los socialistas pugnaban por recomponer una organización, desmantelada por el franquismo, y su nuevo joven liderazgo no aspiraba en lo inmediato a ocupar posiciones en el gobierno democrático, que durante los primeros siete años de la transición estuvo a cargo de dirigentes de pensamiento de derecha o centro-derecha que provenían del franquismo. Y, *last but not least*, Franco había muerto luego de su reinado de casi cuarenta años. El “Caudillo” ya no existía.

Pinochet estaba, en el caso de Chile, vivo y activísimo. Había construido un régimen personal, él era la viga maestra de la dictadura. Régimen y líder habían terminado por identificarse. La dictadura chilena era mucho más parecida a las de Oliveira en Portugal o Franco en España que a las dictaduras argentina o brasileña. En Chile habían transcurrido, al realizarse el plebiscito en octubre de 1988, fecha en que pudiera considerarse iniciada la transición, tan solo quince años desde el hecho más traumático de la historia del siglo veinte: el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Los liderazgos políticos no habían sido sustituidos, sólo diezmados por la muerte o excepcionalmente reemplazados. De esta manera, de las grandes figuras políticas de 1973, Allende había muerto y Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, se había retirado de la dirigencia política por propia voluntad. Pero el ex Vicepresidente de la República y Ministro de Relaciones Exteriores de Allende, Clodomiro Almeyda, era el principal dirigente socialista, Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana en 1973, ocupaba nuevamente la misma posición y encabezaba la Concertación, y Sergio Onofre Jarpa, líder de la oposición de derecha al gobierno de Unidad Popular, seguía siendo el principal dirigente de su sector. Las heridas estaban aún abiertas y mucho. La derecha no olvidaba la amenaza a sus propiedades y a los derechos que el sistema le había garantizado centenariamente encarnada por la Unidad Popular. La izquierda había sido víctima de numerosas y brutales violaciones a los derechos humanos, había perdido segmentos enteros de sus cuadros dirigentes y de base asesinados, desaparecidos, torturados o exiliados. Como los años siguientes demostrarían, la memoria viva del enfrentamiento de 1973 y los años siguientes, más allá del voluntarioso deseo de algunos dirigentes de los partidos de centro—y de la propia derecha, partidaria de olvidar

pronto el régimen de Pinochet—continuaría presente en el acontecer político chileno.

Las Fuerzas Armadas chilenas fueron desplazadas del poder estatal con su consentimiento, sin mediar derrota militar, sólo la derrota política que representó en 1988 el triunfo del NO en el plebiscito con un 54% de los votos, y poco más de un año después la elección de Aylwin como presidente con un 55%. El proceso fue ordenado y la dictadura manejó los ritmos de su retiro gracias al espacio de tiempo disponible entre el plebiscito y la asunción del nuevo gobierno. Procuró asentar la idea que su obra había sido apreciable y que la economía funcionaba con muy buenas perspectivas, basada en los cambios liberalizadores que implacablemente Pinochet y sus asesores habían introducido.

Los socialistas, actores fundamentales del gobierno de Allende, lo eran nuevamente en el plebiscito y en la transición, desde el inicio mismo. De este modo, ocuparon seis cargos en el gabinete ministerial de Aylwin y, si bien su actuación se caracterizó por la moderación, su presencia gubernativa tuvo resonancias simbólicas que no escapaban a partidarios y adversarios.

Si bien la presión internacional para la democratización de Chile fue significativa nunca podía alcanzar la intensidad que representó la presión europea sobre España. El liderazgo civil pinochetista en Chile, aunque tuvo un rol destacado en las negociaciones de la transición, jamás logró en esos años la autonomía que el liderazgo español respecto a la tradición del franquismo. En la izquierda chilena el sector comunista se opuso abiertamente a los pactos transicionales y pugnó por una política que era incompatible con la negociación.

De esta manera las complejidades de la transición chilena configuraron su curiosa naturaleza: un pacto para cohabitar un sistema democrático limitado.

Pinochet dejó la presidencia, que nunca había ejercido con legitimidad reconocible, pero, de acuerdo a los pactos, asumió la máxima jefatura del Ejército hasta que años más tarde le correspondió abandonarla. Entonces, se incorporó al Senado en calidad de Senador Vitalicio. Cuando asumió esta función la mitad de los senadores enarboló retratos de chilenos asesinados y desaparecidos por la dictadura. La otra mitad aplaudió fervorosamente al nuevo senador.

## 5. UN BALANCE.

Es difícil entender la transición chilena sin considerar los dos errores principales cometidos por sus actores.

Parece razonable la tesis que indica que Pinochet, cuando se elaboró la Constitución de 1980, aceptó el plebiscito de 1988 como un trámite formal que permitía una presentación algo más estética a un gobierno cuya duración él preveía en un cuarto de siglo, hasta 1997. Nunca supuso que él no sería el candidato o que él no ganaría el plebiscito. Si llegó a dudar esto último probablemente nunca pensó que se vería obligado a reconocer un resultado desfavorable. Si Pinochet hubiera imaginado que el plebiscito de 1988 constituiría un verdadero riesgo a su continuidad no lo habría aprobado como parte de la Constitución que debió visar antes de someterla a una torcida aprobación formal. Ese fue su error fundamental: no considerar la capacidad política de las fuerzas antidictatoriales para superar sus diferencias, coaligarse y aprovechar los espacios que la propia institucionalidad dictatorial abría.

Sus adversarios, la Concertación, cometieron, por su parte, un fundamental error de apreciación. Una vez consagrado el resultado plebiscitario de 1988 la negociación entre dictadura y oposición adquirió un ritmo acelerado. Representantes de ambos convinieron 54 reformas a la Constitución, que mejoraban algunos de sus aspectos más negativos para un régimen democrático. Con la sola oposición del Partido Comunista estas reformas fueron plebiscitadas y aprobadas en 1989. Algunas voces minoritarias advirtieron dentro de la Concertación que dichas reformas no eran suficientes y que quedaban subsistentes instituciones que limitaban severamente la democracia futura. Primó ampliamente la idea que aquellas materias pendientes serían pronto objeto de reforma una vez que el nuevo régimen democrático se estableciera, e incluso hubo acuerdos verbales entre la Concertación y el sector menos pinochetista de la derecha para proponer esas reformas tan pronto fuera posible. Estos acuerdos no se cumplieron y las posibilidades en que confió la Concertación se vieron radicalmente coartadas por la arquitectura protectora del antiguo régimen contenida en la Constitución.

De esta manera, las grandes reformas políticas que propiciaba la Concertación no han podido realizarse en catorce años de gobierno y luego de varios intentos fallidos. La esencia del esquema pinochetista es la existencia de instituciones que establecen una fuerte garantía a los derechos de la minoría. Este objetivo se logra mediante cerraduras combinadas que hacen prácticamente inexpugnable el edificio constitucional. Se trata de una trampa muy bien urdida.

Una es la composición del Senado. En un sistema bicameral una sola cámara puede ser suficiente para establecer una suerte de veto legislativo de la minoría. Uno de los mecanismos para establecerlo es la existencia de senadores no electos—en un número de aproximadamente un 20% del Senado—que representan a cada rama de las Fuerzas Armadas y Carabineros, la judicatura, el poder contralor, las universidades y los ex ministros de gobiernos anteriores y que son designados, sobre la base de ciertas normas, por el Presidente. De esta manera, los primeros ocho años de gobiernos democráticos hubo ocho senadores que fueron nominados por Pinochet antes de dejar su cargo. Más tarde, cuando la designación correspondió a un Presidente democrático, la composición de los “designados” o “institucionales” se hizo más equilibrada políticamente, pero en muchos casos, entre ellos los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el Presidente tenía muy poco donde elegir.

Un segundo mecanismo es el sistema electoral “binominal”. En todos los distritos y circunscripciones de diputados y senadores se eligen simultáneamente dos candidatos. De esta manera se incentiva la conformación de grandes bloques que, en la práctica, han conducido a una suerte de bipartidismo electoral que excluye a las minorías que no se coaligan, ya sea por propia voluntad ya sea por exclusión. En él participan la Concertación y la alianza de derecha que apoyó a Pinochet. En este esquema electoral un 33,6% de los votos garantiza un electo, igual que un 66,5%. El mecanismo, aplicado ya en varias elecciones parlamentarias, ha tendido a influir el sistema de partidos y su interrelación. Luego de estas aplicaciones los dos bloques tienden a ser más equilibrados numéricamente, ya que lo han sido parlamentariamente durante todo el período en consideración.

Un tercer mecanismo son los quórum establecidos para reformar la Constitución, imposibles de alcanzar sin el concurso de votos de ambos bloques, y para dictar o reformar las llamadas “leyes orgánicas constitucionales”, o sea varias decenas de cuerpos legislativos que regulan las más significativas actividades del país: la educación, la seguridad social, las Fuerzas Armadas, etc.

Un cuarto instrumento de este conjunto de cerraduras, es el Tribunal Constitucional, un órgano jurisdiccional encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. Si bien su constitución fue modificada en una oportunidad, sigue siendo un sostén de la actual Constitución y cada uno de sus contenidos.

Un quinto mecanismo, tangencialmente ya mencionado, es la práctica inexistencia de la institución del plebiscito. Sólo excepcionalmente, en un caso de difícil ocurrencia y escaso valor práctico, podría el Presidente de la República forzar un plebiscito.

Este conjunto de mecanismos y la evolución de los bloques políticos hacia una posición relativa de mayor equilibrio numérico han conducido a que la búsqueda de consensos políticos sea el principal instrumento gubernamental para impulsar nuevas iniciativas. En otras palabras, sin la aprobación de a lo menos un cierto número de parlamentarios de la derecha o “designados” es imposible para el ejecutivo aprobar ninguna ley. La indispensabilidad del “consenso”, es decir del acuerdo, impulsa a todo el sistema político hacia posturas moderadas e impide el debate público de materias de alto interés social pero de perfiles conflictivos.

La Concertación ha gobernado exitosamente la economía del país que, como subrayan los adherentes de la dictadura, sostenía buenas tasas de crecimiento al momento del reestablecimiento de la democracia. En efecto, esa fue una ventaja de la transición chilena sobre otras, quizá la única: el haber tenido lugar en una economía estable. Los gobiernos concertacionistas han preservado esa estabilidad y han elevado los promedios de crecimiento, de modo que, comparativamente con los períodos de la dictadura, la Concertación ofrece resultados mejores. La apertura económica que impulsó la dictadura, que generó altos costos

sociales, fue continuada y profundizada con éxito por la Concertación, permitiendo a Chile nuevas oportunidades de expansión de su comercio exterior y beneficios a sus consumidores. No obstante, la apertura, desarrollada mediante acuerdos bilaterales, ha privado a Chile de una mayor vinculación con los bloques latinoamericanos y, contra la voluntad expresada por sus gobiernos, lo hace aparecer un tanto aislado de sus vecinos en su propio continente.

Durante los gobiernos de la Concertación el país ha más que duplicado el ingreso por habitante, el mejor record económico de América Latina en ese período. Este hecho ha tenido un importante impacto en reducir el número de familias que se encuentran bajo las líneas de pobreza, aproximadamente en un 50%. De esta manera Chile tiene hoy un 20% de sus habitantes calificados como pobres, la mitad de ellos en extrema pobreza. El crecimiento no ha tenido, sin embargo, impacto significativo en la distribución muy desigual de los ingresos, que genera efectos económicos, sociales y culturales graves. Los gobiernos concertacionistas han desarrollado extensas políticas sociales—sobre todo en educación y salud—que consiguen parcialmente corregir la extrema desigualdad. Sin embargo y a pesar que parte importante del ingreso fiscal se destina a gastos sociales, el tamaño del estado en Chile está muy por debajo al de países de mayor desarrollo que impulsan fuertes políticas sociales y, por lo tanto, carece de la potencia requerida como para garantizar un mayor impacto corrector.

En relación con las Fuerzas Armadas la Concertación ha logrado un importante proceso de reprofesionalización y ha ido cerrando el abismo que surgió entre las instituciones militares y amplios sectores de la ciudadanía luego del golpe y durante la dictadura. Es un hecho positivo que ha ocurrido sin que se hayan cerrado los temas más tensionantes, en particular las investigaciones en el área de los derechos humanos. En Chile, durante los gobiernos democráticos no se han dictado nuevas amnistías ni leyes de “punto final”.

Ha sido este un terreno de permanente polémica en los años de gobierno de la Concertación. Pinochet dictó en 1978 una ley de amnistía—de “autoamnistía” la han denominado sus críticos—de modo que ha sido particularmente trabajoso investigar y sancionar los hechos

ocurridos antes de esta ley. Diversas interpretaciones jurídicas, internacionalmente acogidas, han permitido, sin embargo, penetrar en ese territorio. Los tribunales, ahora renovados, han hecho un esfuerzo encomiable por aclarar los casos más emblemáticos y condenar a los culpables. De esta manera, durante los gobiernos de la Concertación han sido juzgados y condenados numerosos responsables de violaciones a derechos humanos, incluidos oficiales activos de las Fuerzas Armadas, entre todos ellos las figuras más conocidas de la represión criminal de la dictadura. Muchos de ellos están actualmente presos en virtud de condenas severas. No obstante, la presión de las Fuerzas Armadas para poner término a las investigaciones ha sido permanente durante los catorce años de gobierno concertacionista. Dos iniciativas legales destinadas a acelerar el cierre de los procesos han fracasado por la activa oposición de los grupos de derechos humanos y, en el Congreso, del Partido Socialista. Una tercera, actualmente en curso ha debido ser modificada para lograr su eventual aprobación. Por otra parte, las organizaciones de derechos humanos, que han cumplido un rol relevante en la consecución de verdad y de justicia en la democracia reestablecida, estiman que los logros están muy por debajo de sus aspiraciones.

Un capítulo especialmente oscuro para la Concertación fue la acción emprendida por el gobierno para lograr que las autoridades inglesas liberaran a Pinochet, luego que fue hecho prisionero en Londres a instancias de la justicia española, en 1998. Si bien el gobierno tenía ciertas obligaciones jurídicas que como tal debía cumplir, ya que la persona detenida ocupaba el cargo de Senador Vitalicio, es evidente que en su accionar sobrepasó los límites de lo jurídico y ejerció acciones políticas tendientes a conseguir que el dictador pudiera ser juzgado por tribunales chilenos. El juicio en Chile condujo, sin embargo, a una dudosa calificación de Pinochet como un enfermo de algún tipo de demencia que le impedía defenderse, de modo que no fue sentenciado. Debió, sin embargo, poner fin a su participación política y renunció a su Senaturía Vitalicia. En todo caso, el hecho actuó como disolvente de importantes diferencias entre la Concertación y sus opositores, ya que juntos aparecieron persiguiendo un objetivo del todo extraño a la historia y naturaleza de los partidos integrantes de la Concertación.



El balance de la transición no puede sino considerarse exitoso globalmente: el reestablecimiento de los derechos ciudadanos básicos es sin duda una conquista importantísima, el progreso material logrado ha sido significativo para todos, la disminución de la pobreza, aunque sea sólo superar las líneas mínimas, es un logro que ningún otro país puede exhibir en el mismo período. No obstante, las desigualdades relativas se han mantenido y las absolutas han aumentado, la verdad y la justicia en materia de derechos humanos han sido parciales, el poder económico de unos pocos controla la mayoría de los medios de comunicación de mayor difusión. Y, en general, la sociedad chilena pareciera haber evolucionado hacia un formato fuertemente regido por criterios mercantiles, con las consiguientes consecuencias en el plano de la cultura, es decir, del modo de vida e interrelación entre sus ciudadanos.

## 6. NOTAS SOBRE EL FUTURO.

En el plano cultural, entendido en este amplio sentido, la sociedad chilena pareciera no sólo no haber crecido, sino haberse empobrecido. Los fenómenos de retracción al mundo privado, consumismo exagerado, desconfianza en la política y las instituciones democráticas, mercantilización de las relaciones personales, han adquirido una dimensión preocupante.

La ciudadanía se ha hecho descreída, la política está venida a menos, es menos púdica y más “farandulera”.

Ya en las elecciones de 1997 aproximadamente un 40% del universo ciudadano potencial no sufragó. Había anulado el voto o votado en blanco, se había abstenido sin aviso o, simplemente, no se había inscrito en los registros electorales y no estándolo, según la ley chilena, no estaba obligado a votar. Un signo fuerte del debilitamiento de la política, embadurnada en la gelatina de los consensos cupulares—obligados y voluntarios—construidos por la Concertación como método de gobierno.

La derecha ha sacado buen provecho de los mecanismos de protección que dejó implantados la dictadura y de las debilidades de la Concertación. Hegemonizada por los sectores más pinochetistas que sin embargo ostentan posturas democráticas en lo político y posiciones que

pudieran definirse como de “conservadurismo compasivo” en lo social, levanta a veces banderas que si fueran agitadas por la Concertación serían calificadas peyorativamente de “populistas”. De esta manera, cobijada por un régimen electoral que le resulta cómodo, ha alcanzado un nivel de presencia política que nunca tuvo, en los tiempos de democracia, en los últimos setenta años. Logró emparejar a la Concertación en la elección presidencial de 1999–2000 y disfruta un virtual empate en el ámbito legislativo. La apatía política de una fracción sustancial de la población favorece su postura pragmática, que se centra en las cuestiones más inmediatas que afligen a las familias más que en grandes temas políticos nacionales o internacionales. Sus posibilidades a futuro son considerables.

Para las fuerzas que encabezaron la lucha con la dictadura y que se agruparon en la Concertación es difícil concebir otra coalición democrática. Al fin y al cabo la alianza entre centro e izquierda, al menos la mayoría de ella, ha dotado a Chile de un referente menos conservador, culturalmente más abierto, con una sensibilidad más igualitaria, incluso si esa Concertación se ha dejado entrapar en el sistema de cerraduras institucionales y de tentaciones políticas originadas en la derecha.

No obstante, la coalición requiere una renovación sin la cual le será difícil superar el empuje que exhiben sus adversarios. Pareciera haber acuerdo entre muchos de sus dirigentes que sólo podrá hacerlo si abre otra etapa, termina un período y sienta las bases de una nueva alianza en que sus antiguos miembros fundadores se dispongan a introducir cambios radicales en su forma de actuar, estilo y programa. Aquello que amenaza el futuro de una “opción progresista” no es la fuerza de la derecha que estuvo asociada a Pinochet—que la tiene, sin duda—sino el hecho que la Concertación está centrada en sí misma y rodeada por una multitud de ciudadanos que no se identifican con la derecha, pero que no encuentran expresión a sus ideas y sentimientos en la actual Concertación. Entre los jóvenes entre 18 y 24 años, o sea los que recién se inician en la vida ciudadana, un porcentaje superior al 80% no se encuentra inscrito.

Es posible revertir situaciones como esta si la Concertación se abre a un diálogo social amplio con todos los sectores, llega hasta los más recónditos intersticios de la sociedad y se

confronta con la realidad que allí existe y con el espíritu crítico que allí se incubaba. En los patios traseros de una “semi democracia”, subterráneos en que se sumergen subculturas que la cultura oficial—expresada magistralmente en una televisión totalmente mercantilizada—reprime o ignora. Las próximas elecciones municipales (octubre de 2004) son un momento particularmente interesante para emprender este regreso de la Concertación a la plaza pública, a la plenitud de la sociedad civil.

Un segundo diálogo debiera constituirse con todos los sectores políticos democráticos y progresistas críticos del modelo de sociedad de mercado a que Chile se encamina aceleradamente. La Concertación debe dejar de lado prejuicios y levantar vetos inapropiados para esta época histórica. Se trata de establecer un diálogo con numerosos grupos políticos de izquierda, ecologistas, libertarios o simplemente democráticos. No será posible alcanzar necesariamente acuerdos ni de gobierno ni electorales. La distancia que los años han consolidado no se supera en plazos breves. Pero no debiera haber objeción a dialogar de modo abierto, transparente y constructivo fuerzas que respetan el sistema democrático como el Partido Comunista, la Sur Da, la Fuerza Social Democrática, entre otros.

En la perspectiva de futuro, Chile necesita romper el círculo vicioso de la desigualdad que marca el modo de vida del que el país es prisionero. Una forma de lograrlo es promover un Pacto Nacional por la Igualdad, con objetivos mensurables a mediano y largo plazo y medidas concretas, y hay que imaginarlo y configurarlo en los diálogos con la sociedad.

Por otra parte, el país necesita una nueva Constitución, no las simples reformas de la que existe. La actual es anacrónica, no garantiza plenitud de derechos democráticos y, en el plano simbólico, fue aprobada en un plebiscito fraudulento y lleva la firma de un dictador. Es difícil lograr el objetivo porque la correlación actual de fuerzas parlamentarias no lo permite. Pero, sin duda, el primer paso es expresarlo de modo transparente.

Berkeley/Santiago de Chile, febrero/mayo 2004.

## BIBLIOGRAFÍA

- Arrate, Jorge y Eduardo Rojas. 2003. *Memoria de la izquierda chilena, Tomo I (1850–1970) y Tomo II (1970–2000)*. Santiago de Chile: Ediciones B.
- Correa, Sofía, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle y Manuel Vicuña. 2001. *Historia del siglo XX chileno*. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.
- Corvalán Márquez, Luis. 2001. *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.
- Garretón, Manuel Antonio. 1984. *Dictaduras y Democratización*. Santiago de Chile: FLACSO.
- Góngora, Mario. 1986. *Ensayo histórico sobre la noción de estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Huneus, Carlos. 2000. *El régimen de Pinochet*. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.
- Lechner, Norbert. 2004. Los desafíos políticos del cambio cultural. En *Nuestros desafíos democráticos*. Santiago de Chile: LOM impresores.
- Loveman, Brian y Elizabeth Lira. 2002. *El espejismo de la reconciliación política. Chile 1990–2002*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Maira, Luis. 1999. *La transición interminable*. Santiago de Chile: Editorial Grijalbo.
- Martner, Gonzalo. 2003. *El socialismo y los tiempos de la historia*. Santiago de Chile: Prensa Latino Americana.
- Moulian, Tomás. 1997. *Chile actual: anatomía de un mito*. Santiago de Chile: LOM Ediciones/ARCIS Ediciones.
- Salazar, Gabriel y Julio Pinto. 1999. *Historia contemporánea de Chile, Tomos I (Estado, legitimidad, ciudadanía) y II (Actores, identidad y movimiento)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Tolosa, Cristián y Eugenio Lahera. 1998. *Chile en los noventa*. Santiago de Chile: Editorial Dolmen.